- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 11 días del mes de junio del año 2014, siendo la hora 17.15, en la Sala de Comisiones de la H. Legislatura, se reúne la Comisión Especial para el Estudio del Código Procesal Penal de Tucumán.

Sr. Presidente (Caponio).- Buenas tardes a todos.

Quiero aclarar que, lamentablemente, hay algunas ausencias por viajes que ya estaban previstos aunque habíamos acordado realizar una reunión de estas características, sobre todo porque era necesario exponer a todos los integrantes el trabajo que ya se ha venido desarrollando diariamente en esta Legislatura a cargo de las subcomisiones.

En este sentido, quiero felicitar públicamente a la doctora Ana Lía Castillo de Ayusa, a los doctores Edgardo Sánchez, Caramuti y Eudoro Albo y Adriana Giannoni porque la verdad es que ya no hay palabras para destacar el trabajo que están llevando a cabo. Yo he podido presenciar las discusiones doctrinarias que realizan artículo por artículo en un trabajo realmente titánico. El avance es muy grande, tanto en el Libro de los Principios Generales, como el Libro de la Investigación Penal Preparatoria, prácticamente por concluirse el primer borrador; está muy avanzado el libro del plenario del Juicio como también el libro de los Recursos que está realizando el doctor Eudoro Albo y queda también en carpeta que están analizando el doctor Sánchez y la doctora Castillo de Ayusa, que es el Libro de las Ejecuciones.

Así que creemos que con el trabajo que se ha desarrollado en este mes y medio, en veinte o treinta días más habría un primer borrador sobre el cual vamos a empezar a trabajar la comisión en pleno. La idea es que las personas que quieran realizar algún aporte particular sobre alguno de los Libros que se acerque a las subcomisiones y plantee su posición, para que así luego traigamos a la Comisión en pleno el análisis de las posturas en disidencia. Si no hubiera disidencia en esta etapa

de trabajo de las subcomisiones se va a traer el trabajo consensuado a las subcomisiones en la próxima reunión.

Esa es la idea de esta reunión, es decir, que se traten Principios Generales y la Investigación Penal Preparatoria, y se va a informar el avance que se ha obtenido y cuáles son las directivas que se han tomado y las resoluciones que hemos creído convenientes.

Para ello, va a hacer su presentación la doctora Ana Lía Castillo de Ayusa sobre Principios Generales y después el doctor Edgardo Sánchez, sobre Investigación Penal Preparatoria.

Sra. Castillo de Ayusa.- Yo voy a comenzar recordando un poco cómo iniciamos el trabajo en esta comisión. A partir de la primera reunión y luego de haber escuchado a los doctores Alberto Binder y Gonzalo Rúa nos quedó, creo, bien claro que podíamos señalar como los principales ejes de la reforma estos tres que pueden ver en la diapositiva: el eje normativo, el organizacional y la capacitación. Trabajar sobre estos tres ejes con los que se que se planteó la reforma nos llevó a esta subcomisión y debo aclarar que en la subcomisión están representados los tres integrantes de las subcomisiones. En aquel momento se decidió que el doctor Sánchez estaría en la Investigación Penal Preparatoria; quien les habla todo lo que hace a las Disposiciones Generales de la ley procesal; el doctor Albo en el Libro de Recursos y la doctora también en la Investigación Penal Preparatoria, el doctor Carlos Caramuti en el juicio propiamente dicho. Todos hemos estado trabajando desde aquella oportunidad que el presidente puso en conocimiento que nos íbamos a reunir a partir de lunes –si mal no recuerdo- 7 de abril.

En aquel momento dijimos que el aspecto normativo de esta reforma es esencial, muy esencial, porque podemos tener las mejores de las normas, pero si no tenemos una buena organización vamos al fracaso; y si no tenemos norma y organización –a lo que debemos sumar capacitación- también vamos al fracaso.

Va de suyo que a esta comisión -y me estoy refiriendo a la cuestión en general- nos interesa lo normativo, pero también debemos tocar lo organizacional. Por ejemplo, cuando debemos definir la sustanciación de la investigación penal preparatoria, sin lugar a dudas, debemos tocar lo organizacional. Esto es si vamos a contar con colegios de jueces de primera instancia de las salas penales, si vamos a cambiar la denominación, etcétera. Pero tangencialmente se puso en estudio la cuestión organizacional.

En cuanto a la capacitación, sí hemos acordado que ya no depende de nosotros, porque esto será responsabilidad del Poder Judicial, en algún momento del Ministerio de Seguridad y lo que hace a la Policía; pero sí creemos que merece una capacitación profunda y además de profunda una capacitación planificada.

Esta comisión comenzó a trabajar siempre alrededor de los principios procesales entre los que voy a señalar, seguramente, algunos que ya son conocidos por nosotros porque nuestra Ley Procesal actual los recoge. Esto es la oralidad, la publicidad, la inmediación –aunque no tanto-, pero sí nos encontrábamos con la gran responsabilidad de poner énfasis en la contradicción porque estamos hablando de un sistema adversarial, en la concentración, simplificación, porque nos lleva a la celeridad en el proceso penal y creo que es una de las mayores preocupaciones.

Pero, claro, abocarnos a redactar una ley para quienes hemos sido integrantes del Poder Judicial y el resto sigue integrando el mismo, no era fácil. Entonces tuvimos que buscar al menos las reglas mínimas de redacción legislativa. Y, en ese sentido, podemos señalar: la división del libro está reservada para leyes voluminosas, como son los códigos. Hemos respetado la estructura de nuestro actual Código que consta de cinco libros. Sí nos encontramos con un signo de interrogación en cuanto a dos libros que hoy lo tenemos separado: la investigación

preparatoria por un lado, y el juicio por otro. Después que podamos reunirnos con el resto de la comisión esto iba a concretarse.

Cuando se opta por un determinado agrupamiento esto debe mantenerse en toda la ley, nos dice otras de las reglas. También hemos tratado de respetarlo y ponerlo en práctica en algunos capítulos de nuestro Código porque no lo hacía. Por ejemplo, en el caso de los sujetos procesales.

Los sujetos procesales debemos señalar: el Juez, Ministerio Público, defensa y en su caso querellante particular. Si vemos nuestro actual Código el querellante particular que actúa en los delitos de procesos de acción pública, está legislado entre los sujetos procesales al comienzo de la ley y el querellante particular con respecto a los procesos de acción privada en el proceso especial. Entonces, hemos tratado de que ambos querellantes, tanto los querellantes en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada estén en el capítulo del sujeto procesal.

También hemos respetado la regla que manda a separar títulos, secciones y capítulos -nuestra actual ley así lo contempla-; la división en artículos y el epígrafe de cada artículo. En algunos, por razones a veces didácticas o de docencia, de mejor comprensión de la norma -entiendo a que esto lleva también a un cambio cultural- hemos, en el mismo artículo, fijado otros subtítulos, por ejemplo que hacen a la forma de presentación o requerimiento de un determinado instituto a la sustanciación, a la conclusión que eventualmente pueda o deba resolver el Juez.

La numeración se mantiene de manera continua y hemos respetado también lo mismo con respecto a los incisos, enumerándolos con 1, 2, 3, etcétera.

Con respecto a las reglas particulares ya sobre los tiempos verbales y signos de puntuación que hacen a la interpretación de la norma, si bien no somos

legisladores, nos hemos esforzado pero entendemos que esto luego va a ser corregido por un corrector literario.

Sr. Presidente (Caponio).- Digamos que los técnicos de la Legislatura van a intervenir en la redacción final del anteproyecto, corrigiendo todo lo que acaba de mencionar la doctora.

Sra. Castillo de Ayusa.- Con respecto a la estructura del Código, el doctor Sánchez tiene un “*power*” que nos puede ilustrar con mayor particularidad y lo tiene así desde que debe explicar la Investigación Penal Preparatoria.

Para iniciar este trabajo, ¿qué hizo la Comisión? Primero, un diagnóstico de la situación de la Provincia. Si bien es cierto ya lo habíamos hecho en la Comisión reunida en su totalidad, teniendo en cuenta que, de alguna manera, en esta subcomisión nos encontrábamos operadores de los distintos actos procesales y estructurales e institutos del proceso, se hizo un diagnóstico desde el punto de vista práctico que se trató de volcar en la redacción del artículo.

Así entonces, se tuvo en cuenta que la actual Ley Procesal se encuentra vigente desde el año 1991 y que a pesar de que el código significó la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio, su aplicación concreta, a lo largo de estos veinte años demuestra la necesidad de corregir ciertos defectos.

Los problemas advertidos giran alrededor de tres cuestiones básicas que creo que la sociedad nos está reclamando: la eficacia del proceso penal, la duración excesiva de la persecución penal, la figura del Juez de Instrucción, título incluso, si me permite la expresión, de nuestro Juez en esta primera etapa del proceso que deberíamos llamar Juez de Garantía y no Juez de Instrucción. También la existencia de un sistema de recursos y nulidades cuya sustanciación y resolución distorsiona todo el sistema. No nos olvidemos de que nosotros tenemos prácticamente un sistema de recursos vertical en el sentido de que se puede recurrir una decisión, llámese un auto interlocutorio, llámese a lo mejor que ante la resolución de una

incidencia se interpone un recurso que debe elevarse a la Cámara, pasa nuevamente al Juez de Instrucción y luego a Fiscalía, sustanciamos otro tramo del proceso, volvemos a estar frente a la resolución de la incidencia, nuevamente un recurso de apelación ante la Cámara. Sin lugar a dudas, todo esto atenta contra la celeridad y eficacia.

Y luego, con respecto a las nulidades, que más de una vez nos horrorizamos cuando corresponde, porque así lo tenemos legislado, no es de una manera caprichosa, declarar la nulidad de algún acto con los actos consecutivos, lo que significa olvidarnos del principio de preclusión, retrotraer todo un proceso y, en ese sentido, vamos a ver que hemos tomado lo último –si se puede decir- en materia de nulidades; ya no hablamos hoy y las últimas leyes procesales del país tampoco hablan de nulidad y también nos preocupó la estructura del Ministerio Público que no se compadece con la función que debe cumplir acá, en el proceso. Esto llevó a plantearnos la necesidad de elaborar la Ley de Ministerio Público, mejorar la parte general adecuándola a los principios de eficacia, oralidad y rapidez, lo que significó acortar sensiblemente los plazos procesales. Además de ello, tratar en lo posible, toda sustanciación mediante un sistema de escritura, pasamos a las audiencias que se celebran de manera oral, lo que haya que sustanciarse, se sustancia allí frente al Juez y este Juez, en la medida de lo posible, debe resolver inmediatamente y si no puede hacerlo inmediatamente, el plazo también es demasiado breve porque –repito- se puso mucho énfasis en la eficacia y en la rapidez del proceso.

Un rediseño de la etapa preparatoria y, en este marco, el tratamiento del principio de oportunidad, participación de la víctima e incorporación de institutos como Conciliación, Mediación y Suspensión del Juicio a Prueba. Y acá sí, con la licencia del señor Presidente, me permito decir que estos tres temas: principio de oportunidad, participación de la víctima e incorporación de institutos, como la Conciliación, Mediación y Suspensión de Pruebas, ha llevado a una discusión bastante sustanciosa y delicada, además de linda, entre los miembros de la Comisión. Pero no nos queremos quedar cortos con nuestra discusión y como luego

lo explicará el señor Presidente, de la metodología a seguir en esta Comisión, la verdad es que deseamos que se incorporen más miembros de la Comisión a esta discusión porque son los temas más importantes de la reforma. Si bien es cierto vengo explicando cómo se trabajó, a veces no tiene mucha importancia si son cinco días o si son tres, o si el Juez puede demorar dos días sus resoluciones, pero sí es importante, por ejemplo, discutir cuáles van ser los extremos de participación de la víctima dentro del proceso penal o si porqué se da cierta participación a la víctima en este nuevo y futuro proceso penal y a qué orientación está respondiendo el que le demos mayor o menor participación.

También acá, por ejemplo, pueden advertir la suspensión del juicio a prueba como otro tema importante ¿por qué lo consideramos en el Código Procesal Penal cuando es un instituto que lo recoge el artículo 76 bis del Código Penal? Bueno, todas estas razones que hemos tenido para trabajar sobre estos puntos, es importante que ustedes los sepan y también los discutamos.

Con respecta a mejorar el procedimiento del juicio se han hecho orales los actos preliminares a la instancia del juicio. ¿Por qué esto? Porque se advierte, y un poco la práctica -y tanto el doctor Caramuti y quien les habla que integra e integré la Sala Penal lo hemos realizado- ha hecho que los actos preliminares al celebrarse por escriturismo nos demoren sensiblemente, lo mismo que el ofrecimiento a prueba, la producción de la prueba, que son actos que no tienen plazos fijados. Entonces ahora todo esto se va a realizar en una audiencia oral. El momento en el que se ofrece la prueba, allí el Juez que será, dentro de este esbozo de organización, que será distinto al Juez que vaya a resolver el conflicto de fondo.

El rediseño de los recursos y nulidades favoreciendo la rapidez -de eso se encargó el doctor Albo- y, si bien es cierto, ustedes se preguntarán por qué, a lo mejor dejo para el último los antecedentes legislativos, cuando quizás alguien pueda opinar, que por metodología es necesario decir qué ley habíamos tomado como anteproyecto todo esto, nuestro trabajo, ocurre que esto nos planteamos como

necesidad de la Provincia de Tucumán, porque muchos pueden pensar que elaborar un Código Procesal es copiar y pegar. En la Comisión se entendió que esto no es tan así, porque las prácticas y las malas prácticas también que podemos conocer son propias de una región. Entonces, podemos tomar el artículo, la norma de una Ley Procesal de otra provincia, pero es necesario adecuarla a nuestra idiosincrasia.

Además, sabemos todos, que por el artículo 5° de la Constitución Nacional cada provincia dicta para sí su organización de Justicia, pero el artículo 121 de nuestro Código, de manera tal que no nos parecía -diría yo-, hasta por respeto, copiar textualmente los artículos de otra legislación.

Entre los antecedentes legislativos que hemos tomado en la idea de lograr todo esto que nos proponíamos se consultó la Ley Procesal de las provincias de Chubut, de Neuquén, de Santa Fe, el anteproyecto de Código Procesal de la Nación, que en estos momentos se encuentra con debate parlamentario, y un proyecto Incip, que también es la madre de los proyectos en esta nueva generación de Códigos como habló el doctor Binder.

Todas las leyes procesales que hemos consultado y estos anteproyectos recogen como idea central el brindar dinamismo y eficacia a los sujetos procesales. Y esto es así porque, de otra manera, no podríamos hablar de un sistema adversarial, sino vamos a dar mayor participación a la defensa, por ejemplo, en este proceso, sino le vamos a dar mayor participación a la víctima, que sabrán y somos conscientes que quedó relegada hace mucho tiempo, más allá que se haya en algún momento reformado el 96 de nuestra actual ley.

Se introducen criterios de disponibilidad de la acción penal y este también es un tema que queremos discutir con el resto de la población, la conversión de la acción pública y privada que ya voy a explicar brevemente en qué consiste, la reducción de los plazos procesales ya hablé, la intervención de la víctima más la intervención de la defensa.

Brevemente me voy a referir a la conversión de la acción pública y privada. Esto es una consecuencia del principio de oportunidad a introducir en la nueva Ley Procesal.

En primer lugar, debo decir que hemos entendido que no admite discusión si el principio de oportunidad puede ser legislado por la Provincia o no, creo que en esto ya doctrinariamente se ha zanjado toda discusión, y por otro lado, no nos olvidemos de las audiencias públicas en las que hemos tenido el apoyo de las universidades y, si mal no recuerdo, del Colegio de Abogados y también del Poder Judicial en cuanto a legislar en principio de oportunidad. Cuestión que, por otro lado, también la trata el anteproyecto de Código Penal que, lamentablemente, el anteproyecto del Código Penal está más demorado que todo lo que nosotros estamos trabajando. Pero, introduciendo al Código Penal el principio de oportunidad, es tanto como decir que queda saneada la incorporación en los códigos procesales.

Ocurre que en el principio de oportunidad, al que también lo va a explicar el doctor Sánchez, el Fiscal puede limitar total o parcialmente el ejercicio de la acción legal por parte del Ministerio Público o en otros casos desistir del ejercicio de la acción penal.

Esto, como consecuencia -y debemos hacer un poco de historia de que la intervención de la víctima antiguamente era bastante activa en el proceso penal. En el sistema acusatorio, y allá lejos en Roma y en Grecia, luego, con el advenimiento del sistema inquisitivo, el Estado tomó para sí todo el ejercicio de la pretensión punitiva y se exilia –podemos decir- a la víctima, que es justamente lo que nosotros estamos viviendo. Y no es menos cierto que hay un reclamo bastante activo de la víctima por intervenir en esto. La poca intervención de la víctima, entendemos, divorcia el estado de la sociedad en el proceso del acto.

Entonces, cuando se aplica el principio de oportunidad, la acción pública queda a disposición de la víctima para continuarla; por eso hablamos de la conversión de la acción pública. La puede continuar a través de constituirse en querellante, si no está ya constituido con dicho rol en la etapa preparatoria, y continuar con el proceso previsto para los procesos especiales de acción privada.

Este es un ejemplo de la conversión de la acción pública en privada.

Y, con respecto a las nulidades, podemos decir que es una idea muy moderna que tiene su base justamente en la práctica de la interposición de la nulidad en el proceso en donde a veces una nulidad formal nos retrotrae tres, cuatro o cinco años de sustanciación, y a veces se pierden actos muy importantes porque han sido actos definitivos. Entonces, hoy ya no se está hablando de “nulidades” sino que se habla de “invalidez de los actos”. Hablar de “invalidez” quiere decir que nos da la posibilidad de su saneamiento. Por lo tanto, todos aquellos actos que a lo mejor por mera formalidad hoy deben ser declarados nulos, con acuerdo de las partes, pueden ser saneados, que es justamente el interés de quien opone una nulidad.

Pero, a pesar de que hablamos de “invalidez de los actos”, de “saneamiento”, de tratar de salvar el acto procesal, no se abandonan los principios propios para que proceda la nulidad: el principio del perjuicio, que quien solicite en este caso la invalidez o saneamiento no sea el mismo que lo ha causado, etcétera.

Y con respecto al otro tema, que repito que nos interesa conversar, es la intervención de la víctima. ¿Por qué digo esto? Porque hay legislaciones que le permiten a la víctima recurrir a algunos actos procesales aun cuando no se hayan constituido en parte querellante, y hay otras que no le conceden este derecho.

Bueno, nosotros necesitamos un consenso de toda la Comisión porque no desconocemos ni nos apartamos que estamos frente a una responsabilidad bastante grande e importante como es la reforma del Sistema Procesal de la Provincia, y en

este caso la participación de la víctima querellante no es otra cosa que la participación de la sociedad en el proceso penal en el caso que resultara víctima o que resultara ofendida.

No me voy a explayar más porque no quiero entrar ya en cuestiones doctrinarias acerca de este tema pero sí esta es una breve referencia a cómo ha trabajado esta subcomisión y a la necesidad con la que nos encontramos hoy.

Asimismo, queremos discutir con el Colegio de Abogados, el capítulo de la Defensa porque queremos debatir sobre la intervención del defensor en particular y en aquellos casos donde ya puntualmente este Código se refiere a la Ley n° 5233, no digo el “okey” pero sí queremos la opinión de ustedes. Y lo mismo con respecto al Ministerio de Seguridad ciudadana porque no nos debemos olvidar que nosotros tenemos un capítulo donde mientras no tengamos policía judicial, la Policía actúa como policía de investigación y a veces necesitamos, no tan solo la preparación sino también discutir el ámbito en que la ley procesal pueda delegar las funciones en la Policía. Esto es todo.

Sr. Presidente (Caponio).- Agradecemos la exposición de la doctora Castillo de Ayusa. Realmente hemos debatido mucho y una de las cuestiones a tratar era fundamental que planteemos acá cuál era el trabajo que se viene desarrollando de manera general. Yo creo que en esta próxima etapa se tiene que dar ese debate de posiciones de discusión en la subcomisión, de modo que en la próxima reunión de comisión vengamos a tratar las disidencias que se han planteado.

A continuación, vamos a escuchar al doctor Edgardo Sánchez en su informe sobre los avances de la Investigación Penal Preparatoria.

Sr. Sánchez.- En realidad, mi exposición va a abarcar lo que hemos estructurado por ahora, provisoriamente, en tres libros. Como dijo la doctora, el Código Procesal Penal en Tucumán tiene una estructura que se podría decir que es clásica porque fue el primer código que usó la estructura de dividir en cinco Libros: Disposiciones

Generales, Investigación Penal Preparatoria, Juicio Penal, la etapa de Recursos, y la etapa de Ejecución. Los códigos más modernos o actuales tienen una disposición en seis Libros en algunos casos porque tienen una etapa que no está prevista en los códigos de primera generación, que es la etapa intermedia o etapa de control de acusación, con lo cual hemos avanzado hasta esta primera etapa para plantearlo en esta reunión.

Están trabajados también el libro respectivo del juicio oral y los diferentes tipo de procesos judiciales, que están coordinado por el doctor Caramuti; y el capítulo de los Recursos y todos los sistemas de impugnación que está trabajado por el doctor Eudoro Albo.

En esta oportunidad, simplemente vamos a llegar a una exposición que abarque lo que son las Disposiciones Generales, la Investigación Preparatoria y esta nueva etapa prevista en los códigos, que es la etapa intermedia. Luego discutiremos con todos los miembros de la Comisión si conservamos esta clásica disposición de cinco Libros o si incorporamos este sexto Libro, de la etapa intermedia; que es una discusión doctrinaria más que nada o de tintes académicos.

La primera parte está lista, con aproximadamente 265 artículos; esta numeración correlativa es provisoria, obviamente, porque seguimos discutiendo y revisando el primer borrador del texto en el cual se ha planteado todo lo que la doctora ha expuesto y que ha sido traducido, obviamente, en normas particulares que han ido tratando cada uno de los puntos.

Entonces, Libro I para Disposiciones Generales, y Libro II para la Investigación Penal Preparatoria y Libro III, para la parte intermedia o Control de la Acusación.

El Libro I, de las Disposiciones Generales, abarca hasta este momento cuatro Títulos, el de las Normas Fundamentales, las Normas relativas al Ejercicio de la acción Penal, el título III, trata de la Justicia Penal, es decir el funcionamiento de la judicatura penal, la competencia, los sujetos procesales, el Ministerio Público, la

defensa, la versión de la defensa pública y la defensa particular, el imputado, la víctima, el querellante y el acto civil.

El título cuarto trata de la actividad procesal. Vamos, a partir de esta primera presentación, a hacer un desagregado de los capítulos que está previsto en cada uno de los títulos para ver de qué manera está planteado este primer borrador.

Dentro de las normas fundamentales, el Capítulo I trata sobre Principios y Garantías Procesales. Allí está a la vista la enumeración de dieciocho artículos de Principios y Garantías Constitucionales.

Actualmente, el Código Procesal Penal tiene nada más que el artículo 1º, con una enumeración de las garantías en general contenidas en la Constitución. Esto lo conversamos con la doctora y hemos dejado bien en claro la situación el Código nuestro del año 1991 y la Reforma Constitucional Argentina del año 1994, incorpora los tratados con posterioridad. Entonces, los códigos de segunda generación tienen todo un desagregado que analiza en particular cada una de las garantías, dándole una extensión acorde a los tratados internacionales que han sido incorporados al texto constitucional.

Por eso tenemos garantías constitucionales de las personas que se tratan, a modo de ejemplo, el artículo 2º de garantías constitucionales de las personas trata el juicio previo, la duración razonable del proceso y en todo esto hay un desarrollo en el artículo, la igualdad, los principios del proceso acusatorio, el estado de inocencia, la duda a favor del investigado, del procesado en la investigación, la prohibición de la persecución penal múltiple, la protección de la impunidad y la privacidad, durabilidad del derecho de defensa, carácter irrenunciable y asistencia técnica, incomunicación del imputado. Luego vamos a ver que esto impacta, obviamente, en la actuación de la defensa garantizando siempre la intervención del defensor previo a cualquier acto que requiera la intervención del imputado, garantizando un derecho a la comunicación del imputado con el abogado defensor; el derecho al recurso, el derecho a contar con un intérprete y la dignidad del defensor, que lo incluimos

dentro de las garantías que están impuestas a favor de las personas sometidas a procesos.

Y en esto de la dignidad del defensor, estamos olvidando específicamente la disposición que contiene el artículo 5° de la ley n° 5.233, que equipara a los abogados en el ejercicio de la función al respecto y consideración que se merecen al igual que los magistrados.

Y esto tiene que ver con un reclamo -en que nos hacemos eco- de los abogados en ejercicio de la profesión que muchas veces tiene inconvenientes de acceder a una información de las investigaciones en curso. Cuando llega a la comisaría en muchos casos no tienen la posibilidad de tomar contacto con su defendido, no pueden ver las actuaciones.

Hoy por hoy, en nuestro Código tiene un principio de reserva de las actuaciones y en la práctica eso implica lo que en algún momento se mencionó aquí, por uno de los expertos que vino a visitarnos, como el “*secretismo*” del expediente. La verdad es que la palabra es desagradable plantearla dentro del ámbito de investigación grave como es el secreto, pero es lo que en la práctica existe.

Entonces, hemos analizado esta situación, hemos tomado en cuenta los reclamos de parte de los abogados y está incluida específicamente una disposición con respecto a la posibilidad del abogado defensor de acceder a la información. Lo mismo es cómo acreditarse al abogado ante los ámbitos donde debe actuar.

En este mismo Capítulo incluimos una disposición específica que trata en general los derechos de las víctimas, que luego en el Capítulo de los sujetos procesales vuelve a ser desarrollado y específicamente se trata cada uno de los derechos que otorga el Código Procesal.

Protección integral, trato digno y respetuoso al derecho de la información y participación en el proceso penal en defensa e interés, que incluye lo que la doctora anticipó cómo este derecho a recurrir en forma autónoma ciertas decisiones que les sean desfavorables durante la investigación sin necesidad de constituirse en querellante o de tener un rol de actor civil.

El Título segundo referido al ejercicio de la acción penal incluye un capítulo de reglas generales, un capítulo de reglas especiales en los cuales se trata, en la Sección I, los aspectos fundados constitucionalmente, lo que hoy tenemos como la investigación jurisdiccional, luego el tipo especial de investigación, las excepciones, y una sección que habla específicamente de los pueblos indígenas. Y esta es una novedad, en muchos códigos que tienen poblaciones indígenas en sus provincias, como la Provincia de Neuquén o en la misma Provincia de Chubut, tienen disposiciones específicas que remiten a aplicar normas internacionales, específicamente normas de la OIT con respecto al respeto a los mecanismos de solución de conflictos que deben operar dentro de las comunidades indígenas, o sea hay una remisión a esa normativa que nos parece interesante. Obviamente, va a ser objeto de discusión por parte de los miembros de la Comisión.

En el artículo 3º, las reglas de disponibilidad de la acción, se fijan cuáles son los criterios de oportunidad y luego hace un desarrollo de la suspensión de juicio a prueba, tomando en cuenta, obviamente, lo que establece el Código Penal.

Acá hay una cuestión interesante de señalar. El capítulo V trata de la acción civil y nosotros hemos considerado conveniente, hemos analizado que hay códigos que eliminan el ejercicio de la acción civil del proceso penal y otros que lo mantienen. Se ha analizado mucho este tema de la problemática que implica la acción penal dentro del proceso civil. Hemos considerado que si se incluían dentro de los criterios de oportunidad la posibilidad de promover acuerdos de conciliación y de reparación, el ejercicio de acción civil va a quedar en la práctica acotado a ciertos casos de delitos graves que no pueden ser objeto de reparación o conciliación, con lo cual el ejercicio de la acción civil no va a causar mayor perjuicio en términos de celeridad en el avance de la investigación; de hecho, no ocasiona ningún perjuicio, pero hubo en algún momento una discusión, un debate en torno a eliminar la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal; de hecho, ya Neuquén no la considera, y el argumento es que si existen vías de reparación, conciliación o acuerdos para solucionar conflictos previstos en la ley

penal, la acción civil no debe ejercerse en el Proceso Penal. Es una forma de promover este tipo de acuerdos, eliminando el ejercicio de la acción civil. Pero es una posición a discutir y a analizar.

Además, hemos tomado en cuenta que hay abogados que no se dedican a la defensa penal ni a la querrela, pero sí al ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. Entonces, desde esa perspectiva, también hemos considerado que esto atañe al ejercicio de la profesión del abogado particular.

Con respecto a los criterios de oportunidad, ¿cuáles han sido los criterios que hemos considerado? Existen numerosos estudios hechos por la Academia en relación a cuáles son los criterios de oportunidad previstos en los diferentes códigos. Entre diez o doce códigos procesales penales provinciales prevén no todos los mismos criterios de oportunidad, pero básicamente reflejan todos los criterios que están previstos, obviamente, para discutir.

La posibilidad de la conciliación, mediación y reparación a la víctima, que esto surge de la idea del cambio paradigmático del Derecho Penal para abandonar la idea del Derecho Penal como infracción que merece solo un castigo como forma de solucionar esta infracción por la idea de conflicto que admite diferentes tipos de soluciones posibles, entre las cuales estarían conciliación, mediación y reparación.

Pena natural, selección de hechos innecesarios, exigua contribución al hecho, expreso pedido de la víctima para que el Fiscal se abstenga de ejercer la acción penal, enfermedad incurable en estado terminal, edad avanzada y el arrepentido colaborador. Luego fijamos una condición necesaria, que es el requisito que debe observarse para que sea posible la aplicación de estos criterios. Y la aplicación de precedente que es un derecho otorgado en principio al imputado de solicitar al Fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad y en un caso análogo se hubiera ya aplicado a otra persona.

Esto tiene, obviamente -y eso lo hemos discutido bastante y esperamos que la discusión se profundice- un requisito fundamental, que es que la persona no tenga

antecedentes, que sea su primera situación de conflicto penal. Si tiene antecedentes previos por haber cometido otro tipo de delitos, queda fuera de esta posibilidad de criterio de oportunidad.

Si la persona tiene algún antecedente por algún otro hecho delictivo previo, no se admite la aplicación del criterio de oportunidad. El criterio es oportunidad es para un primario, o personas que primera vez están en proceso penal.

Es aplicable el criterio de oportunidad bajo ciertas pautas o circunstancias y requisitos, no hacer una aplicación para todos los casos y sin ningún tipo de requisitos. Está reglada la aplicación. Y esta es una de las condiciones que hemos analizado. Obviamente, este es un análisis preliminar que requiere la contribución de todos. Queremos la opinión de todos, lo he explicado previamente, será la opinión mayoritaria la que decidirá el texto de la norma. Los miembros que estén en una posición diferente podrán hacer su despacho en minoría que también será puesta a consideración de la Legislatura.

Hemos considerado que es importante imponer este requisito de lo que se llama un delincuente primario –si cabe la expresión “delincuente”- o de una persona que por primera vez se somete a la Justicia Penal en el marco de un conflicto penal. Pero es discutible, obviamente, estamos recién en las discusiones preliminares.

El Título III habla de la Justicia Penal; hay una revisión en el tema de jurisdicción y de competencia de los tribunales competentes de los procedimientos de excusación y de recusación, que son similares a los que tiene nuestro Código actualmente, cómo se integrarían los tribunales de jurados y hay un llamado de atención, el Código no va a contener la reglamentación del juicio por jurados. Hemos acordado que eso va a quedar luego por una ley especial, pero en general sí se van a establecer las pautas para que luego la ley especial los desarrolle posteriormente.

Con respecto a la Justicia Penal es importante señalar que así como se ha pensado y se habla de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales para dotar de otra estructura al Ministerio Público Fiscal y, a su vez, analizar la procedencia,

incluso a nivel constitucional, de dividir el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa o Ministerio Público Popular, también es necesario pensar en una nueva reglamentación a aplicar en la organización de la Justicia penal, porque estos sistemas adversariales prevén la existencia de “*pooles*” de jueces o colegios de jueces que van a intervenir exclusivamente en cuestiones de índole jurisdiccional, el Juez queda eliminado de toda cuestión administrativa y de todo el manejo administrativo de la oficina que lo asiste y se trata de delegar o de transferir toda esa función administrativa a una oficina especializada que hace de soporte, tarea de soporte para los jueces; el Juez simplemente se encarga de ir a la audiencia y de resolver las cuestiones que se le plantean, todo el trabajo administrativo queda a cargo de la Oficina Judicial, que en muchos lugares se denominan OGA, porque son las siglas de Oficina de Gestión de Audiencias, que es la labor principal pero no la única que desarrollan estas oficinas de soporte a la tarea jurisdiccional. Es decir, en el nuevo modelo de organización judicial-penal, es fundamental separar la función netamente jurisdiccional y exclusiva de los jueces de la función administrativa de soporte a la labor de los jueces que involucra especialmente la gestión de las audiencias que es el ámbito donde se desarrolla el proceso penal y también las otras tareas que son afines a él, las tareas de notificación, de citación, de registración, de archivo, en fin. Y hay una función extra que es necesaria a los fines de la aplicación del criterio de oportunidad, suspensión del juicio a prueba, juicio abreviado y cualquier otra medida sustitutiva a las penas de prisión que requieran de control.

Y una de las falencias que hemos señalado en el diagnóstico previo, es que todas estas medidas carecen hoy de una oficina que se encargue efectivamente en la práctica, de ejercer un control y seguimiento de la suspensión del juicio a prueba, son controles formales que se hacen hoy por hoy y esto a su vez promueve, de algún modo, según indica la doctrina y es lo que se tomó como base para hacer la propuesta de este tipo de oficina, una cierta idea de impunidad en el sentido que al no haber controles o al no comunicarse o publicitarse el cumplimiento de estos

acuerdos, el ciudadano común entiende o interpreta que no hay una solución real al conflicto, que no se ha tratado el conflicto penal y que no se ha hecho nada al respecto; entonces, esta oficina permite un control efectivo, produce información valiosa para el Juez de ejecución de sentencia o para el Juez de garantía si el control se realiza respecto de una prisión preventiva o alguna medida de coerción y les permite a los jueces, según la instancia en la que se encuentre el imputado sometido a este tipo de controles, resolver sobre su situación ante un posible incumplimiento, ya sea para perder un beneficio de una medida de coerción morigerada o para el cumplimiento de alguna de las medidas sustitutivas a las penas de prisión.

Esta oficina está creada en el ámbito del Poder Judicial, se llama de esta manera Oficina de Control de Reglas y Conductas y Acuerdos, fue creada por una acordada que preveía la puesta en marcha del llamado Plan Piloto para el ámbito del Centro Judicial de Concepción, es decir, que existe en la actualidad y tiene personal designado y está trabajando actualmente llevando a cabo controles en las medidas de suspensión de juicios a prueba en la Ciudad de Concepción, donde estaba prevista originalmente la Oficina.

En otras jurisdicciones se las denomina genéricamente como OMA (Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a las Penas de Prisión) y su función es esencialmente la de controlar. Esta estructura debe ser tenida en cuenta al momento de pensar o de repensar la organización judicial para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tenemos el capítulo de la defensa, el capítulo relativo a la víctima, en donde desarrollamos el derecho fundamental de la víctima, su intervención como querellante, su intervención como actor civil y también la intervención del civilmente demandado, Respecto del Ministerio Público, normas generales y sus órganos dejando a cargo de la Ley Orgánica del Poder Judicial o Ley Orgánica del Ministerio Público que pudiera dictarse con carácter especial, está la reglamentación de esa estructura. Este es nada más que uno de los modelos posibles, el modelo que sigue la Provincia de Santa Fe, tal vez la Ley de Organización del Ministerio

Público más moderna que tiene el país, donde no tienen un ministro Fiscal, ellos tienen un procurador general ante la Corte, tienen un diseño constitucional similar a la Provincia de Tucumán en cuanto no hay un desarrollo de la norma constitucional respecto del Ministerio Público Fiscal. Solamente hay una mención del procurador y para poder solucionar lo que esta necesidad de dividir el Ministerio Público popular del Ministerio Público Fiscal, por ley especial han creado el llamado Ministerio Público de la Acusación y han puesto en la cabeza de ese Ministerio a un Fiscal General, que depende del Procurador General, para no infringir con esto en la disposición constitucional, y han creado por una ley especial el servicio público de la Defensa Penal a cargo de un Defensor General, que es la cabeza de ese servicio público, pero a su vez dependerá del Procurador, con las limitaciones que tiene respecto de la defensa, una cuestión formal, para evitar una colisión con la norma constitucional y hemos tomado esa referencia, porque es muy similar a la norma constitucional provincial, la situación es similar básicamente.

Entonces este es un sistema donde se divide el Ministerio Público por Fiscalías regionales, en otras jurisdicciones se las llama Fiscalías de Distrito, incluso hay una legislación santafecina que la menciona de esa forma, o Fiscales coordinadores, que ejercen una suerte de Jefatura respecto del resto de los Fiscales, que a su vez actúan asistidos por Fiscales adjuntos, que son funcionarios de ley a los que se les da una actuación similar a los Fiscales y a su vez asistido por personal administrativo y auxiliar.

Esto es solo una estructura posible también a ser discutida, de esto también hay un borrador preparado para ser debatido en el ámbito de la comisión.

Sr. Hofer.- Una consulta: ¿está contemplado el derecho de las víctimas en la etapa de ejecución de la pena, o solamente en la etapa de instrucción penal?

Sr. Sánchez.- Sí, hay un derecho genérico en la víctima, a ser oída, cada vez que se toma una decisión respecto de la situación del imputado durante la investigación, durante la etapa de juicio y durante la etapa de ejecución.

Entonces, la víctima tiene derecho a ser oída, tiene derecho a ser informada y tiene derecho eventualmente a recurrir a alguna decisión que considere adversa en general, está planteado el tema, está considerado.

Sra. Castillo de Ayusa.- Además, últimamente, también se exige pretorianamente, porque no lo tenemos legislado y sí, pienso que lo vamos a tener, que todo incidente de ejecución se tramite dando vista al Fiscal, si la incidencia fue planteada por la defensa o dando vista a la defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Respetando el debido proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia.

Sr. Hofer.- Existen muchas situaciones, como hoy hay instrumentos internacionales que hablan de los derechos de las víctimas, de hecho en algunas legislaciones ya están muy avanzados con esto cuando hay un proceso de ejecución o un proceso con libertad condicional.

Sr. Sánchez.- En el Capítulo VII, en la sección I, cuando habla de los Derechos Fundamentales está previsto específicamente todo tipo de intervención que le cabe a la víctima. Y en eso está el desagregado y dice, básicamente, que tiene derecho a ser oído cada vez que se va a tomar una decisión respecto de la situación del imputado en el curso de la causa durante la etapa de investigación, juicio y ejecución.

Sra. Castillo de Ayusa.- Es más, hoy las salas penales ya están fijando como reglas a fin de conceder la libertad condicional, la prohibición, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, de acercarse al domicilio de la víctima o para salidas transitorias también se les está fijando este tipo de normas.

Sr. Sánchez.- Respecto al defensor particular: aquí sí, algunas cuestiones a destacar: la incorporación de lo que es el artículo 5° de la Ley 5233 al texto del Código, que es una herramienta que la conocen los abogados que litigan, pero por ahí como herramienta de trabajo y de capacitación nos es útil que esté en el Código Procesal porque también con ello trabajan los operadores policiales. Y a veces se da mucho el reclamo o la queja del abogado litigante con relación al trato que recibe o dispensa de parte de los policías.

Entonces, hemos tomado una norma del Código Procesal Penal de Chubut que nos parecía muy acorde a esta situación como respuesta al planteo de los abogados.

Así dice el Código: *“En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes escritos que este requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y autoridad judicial a cuyo cargo se hallare la causa.*

No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro horas del día”. Esto para garantizar, digamos, el ejercicio efectivo de la defensa.

Y: *“La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio de Abogados respectivo es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado”.*

Hemos previsto luego, ya esto es un derecho del imputado: *“Toda persona tiene derecho a la asistencia y defensa técnica y letrada efectiva, que será garantizada por el Estado”.*

En el caso de la incomunicación: *“Queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal del imputado”.* Esto genera problemas muchas veces, y el doctor Fara lo podrá corroborar, en cuanto a las posibilidades de contactar al cliente a veces en los ámbitos judiciales, otras veces en los ámbitos policiales o penitenciarios. Entonces, la norma expresa solucionaría ese problema.

Por último, la norma de allanamiento a estudios jurídicos, está prevista en varios códigos procesales penales. Ya estos reclamos desde el año 1987 -era un joven abogado en esa época e intervine en las Primeras Jornadas Nacionales de Defensa de la FACA- se trataba -algunos Códigos en ese momento lo tenían expresamente previsto- de promover que las provincias, a nivel de las Legislaturas provinciales provean la inclusión de este tipo de normas, básicamente para garantizar no solo el secreto profesional del abogado en el ámbito de su estudio sino también por la función social que tiene el ejercicio del Derecho, que es otra manera de evitar el avasallamiento a nivel profesional.

Sr. Jogna Prat.- Actualmente está en vigencia.

Sr. Presidente (Caponio).- Todo esto es un borrador.

Sr. Sánchez.- El Libro I, Disposiciones Generales relativo a la Actividad Procesal. Acá aparece mucho de lo novedoso que mencionaba la doctora con relación a cómo se lleva a cabo el proceso, aparecen los tipos de audiencias, lo que son las reglas en las audiencias, cuánto debe durar el procedimiento, cómo se llevan a cabo las comunicaciones, tomando en cuenta que la investigación a partir de ahora es desformalizada, se sigue a través de un legajo y esa desformalización impacta sobre los modos de registrar y los modos de comunicar cada convocatoria a actos de procesos.

“Inadmisibilidad y actividad procesal defectuosa”, es lo que la doctora mencionó como la novedad del Código en cuanto a sustituir el sistema de nulidades por un sistema de invalidez de actos procesales donde el principio general es opuesto al de las nulidades. Con la nulidad se pretende excluir a este acto del proceso, al acto nulo, al acto viciado se lo excluye del proceso.

Esto ha generado la necesidad de que inclusive la Corte de la Nación genere toda una jurisprudencia acerca del planteamiento de las nulidades insustanciales para evitar que se retrotraiga el proceso a etapas ya cumplidas.

Digamos, con la incorporación de este tipo de legislación cambia el principio por el principio de la convalidación de los actos procesales, el saneamiento como primera posibilidad y la convalidación, dejando la nulidad como último recurso. No es que se elimina la nulidad, se prevé la nulidad como último recurso donde la primera línea de solución es el saneamiento, la convalidación y por último recién la nulidad. La idea es salvar el acto procesal para evitar demoras, dilaciones o planteos dilatorios que pudieran presentarse.

Respecto de la audiencia, tenemos una definición prevista de cómo será una audiencia en el marco del proceso penal y qué implica la audiencia, la publicidad de la audiencia, la intervención de los medios de comunicación en el desarrollo de una audiencia, cómo se lleva a cabo la audiencia y cómo se registra. Está previsto en el texto del borrador.

Con respecto a la “actividad procesal defectuosa”, como les decía, están previsto los principios generales, el saneamiento como primera medida, la convalidación y, por último, recién la declaración de nulidad.

Sr. Jogna Prat.- Respecto al tema de las nulidades, hay varios temas expuestos, el tema como decía la doctora, de la defensa pero no quería dejarlo pasar. Y un tema que sí me preocupa básicamente es el de las nulidades absolutas...

Sr. Sánchez.- Eso se conserva, las absolutas se conservan; en lo que es asegurar la intervención del imputado, el defensor, el sujeto procesal; eso no se puede eliminar.

Sra. Castillo de Ayusa.- Así es.

Sr. Jogna Prat.- ¿El primer principio va a ser la convalidación de esos actos?

Sra. Castillo de Ayusa.- Claro.

Sr. Sánchez.- Pero hay supuestos donde la nulidad es absoluta y el acto tiene un efecto tal que no se lo puede sanear de ninguna manera; son las absolutas básicamente donde se asegura la intervención de las partes, el imputado, el defensor. Está previsto que en todos los actos que el imputado deba tomar intervención siempre esté con su abogado defensor, siempre; si no participa, el acto es nulo.

Sr. Jogna Prat.- El sistema procesal civil lo resume de una forma muy básica, que es cuando altera la estructura esencial del procedimiento; yo creo que es una definición genérica y básica que en todos estos casos que pone de ejemplo el doctor, cuando no está el imputado, está alterada la estructura esencial del procedimiento.

Sra. Castillo de Ayusa.- Claro, se legislan principios generales de aquellos actos que puedan ser saneados y principios generales de aquellos actos en donde su defecto es absoluto, que es tanto como hablar de una nulidad absoluta; que no puede ser convalidada. Incluso con respecto al impulso procesal para ser declarada se mantiene de oficio para el defecto absoluto y se mantiene a pedido de las partes. Pero lo que interesa es que se trata de salvar el acto a los fines justamente de la celeridad y del principio de preclusión. Si no, a veces con la nulidad de un acto retrotraemos el proceso dos o tres años atrás y se pierden actos que quizás son mucho más importantes que el defecto formal.

Sr. Sánchez.- Continúo.

El Capítulo III habla del desarrollo de la investigación y especifica cuáles son las atribuciones que tiene tanto el Ministerio Público como la Defensa recordando que en este nuevo sistema, el adversarial, si bien la carga siempre de probar la

acusación es del Ministerio Público, la Defensa va a llevar a cabo su propia investigación en tren de demostrar su propia teoría del caso o de llevar adelante su propia teoría defensiva. Y está previsto en este Capítulo de qué manera procede el auxilio judicial para el defensor particular o el defensor público en la medida que no tenga la estructura de investigación que pudiera requerir para una prueba técnica o científica; a través del auxilio judicial se suple esta situación. Y esto es para el Fiscal en primer lugar, o para el Juez en caso de que el Fiscal lo considere impertinente o inútil en un sistema similar al que hoy sigue Chile, porque también entre los antecedentes que hemos consultado hemos seguido –digamos- el Código matriz –por decirlo de alguna manera-, es el Código chileno y hemos tomado Chubut y de ahí los códigos más modernos, de los cuales el último es el de Neuquén.

Respecto de la producción de la prueba hay un Capítulo que establece reglas generales y luego las pruebas que tradicional y clásicamente tenemos en nuestro Código; las mismas, con un principio de libertad probatoria que se mantiene y la posibilidad de aplicar estas normas a los medios probatorios no previstos expresamente en el Código y en tanto y en cuanto se asemejen a algunos de estos medios probatorios sí previstos. Y es que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y por ende vamos a contar con elementos y medios de prueba o vamos a tener recursos tecnológicos que nos van a permitir obtener información útil y no va a estar previsto específicamente; en ese caso van a primar los principios y garantías constitucionales con respecto a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones. Pero, en lo posible, se van a aplicar estas reglas previstas.

En el Libro II de la Investigación Penal Preparatoria, el Título II trata de las medidas de coacción y medidas cautelares, que es un capítulo bastante sensible, que interesa bastante en cuanto a en qué casos proceden las medidas de coacción y cuáles son y es el que ha despertado mayor discusión en todas las provincias en que se han puesto en funcionamiento estos sistemas adversariales.

Por último el Título III, la conclusión de la Investigación Penal Preparatoria. Respecto a las medidas de coacción, aquí sí hacemos un pequeño desagregado y

establecemos un principio general por el que la finalidad y el alcance de las medidas de coacción. Se menciona la primera situación, aprehensión y detención; y de la aprehensión tomado en cuenta los casos que flagrancia. ¿Qué ocurre con el pedido de la demora y la posibilidad de que el Fiscal, por él ordene la aprehensión?, ¿Cuál es el trámite de la audiencia?, y fijamos un plazo muy breve de veinticuatro horas para el control de la detención, la privación de libertad que está sufriendo esta persona, con lo cual aseguramos los tiempos, que es una de las quejas que hay con relación a la demora en el trámite que se les otorga a los casos con personas privadas de la libertad. En este caso los plazos son muy breves, veinticuatro horas para una audiencia de control de detención; 72 horas para la audiencia de revisión, que vendría a ser la apelación de la prisión preventiva, los plazos son muy rápidos y los controles son inmediatos, con lo cual se garantiza el principio del Código Procesal, que actualmente lo tiene nuestro Código y que se lo podrá encontrar más adelante, que es el principio de la libertad.

De algún modo, aquí tenemos una innovación, si bien tenemos previsto esto como limitaciones al ejercicio de la libertad, otros códigos lo presentan como medidas de coerción, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que el Juez lo fije, la obligación de presentarse ante el Juez o ante la autoridad que el designe, la prohibición de salir del ámbito del territorio que se determine o de visitar ciertos lugares o de comunicarse con personas determinadas siempre que no afecte el derecho de defensa, el abandono inmediato del domicilio cuando la víctima conviva con el imputado, la prestación de una caución económica adecuada, la detención domiciliaria y su propio domicilio con el de otra persona, sin vigilancia o con la que el Tribunal disponga y la prisión preventiva. Son alternativas, digamos, dejando la prisión preventiva como la más grave y la última de estas posibilidades.

Respecto a la prisión preventiva tratamos los supuestos peligros de fugas, el texto del Código propone la difusión cómo defenderse ante peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, ¿cuál es el plazo de la prisión preventiva? y ¿en qué plazo se

llevan a cabo las audiencias que deben resolverse?, ¿quién es competente para plantear este pedido, el procedimiento, forma y contenido de la decisión?

El desarrollo es mucho más amplio, pero nos enfocamos como cuestiones particulares en la de la duración de la prisión preventiva, el plazo es menor al que prevé actualmente. Porque al mismo tiempo se prevé que el proceso, la etapa de investigación sea mucho más rápida y llegue mucho más rápido a juicio, con lo cual la duración de la prisión preventiva más acotada también obliga al Ministerio Público a terminar la investigación mucho más rápida y llegar realmente a juicio, que es lo importante en los casos en que no fue posible algún otro tipo de solución previa.

El examen obligatorio de la prisión preventiva y de la internación. Para evitar casos donde la prisión preventiva es compleja, está previsto, hay un capítulo dentro del libro del juicio de los procesos, existe un capítulo especial dedicado a las investigaciones complejas, donde los plazos están ampliados; están ampliados los plazos de investigación y están ampliados los plazos de la prisión preventiva, porque la investigación es compleja. Ahí se define cómo entender la complejidad. Obviamente hay diferentes formas de definirlo, el doctor Caramuti está trabajando con ese tema. Algunos de los criterios son: el número de intervinientes, la gravedad del delito o si se trata de una organización delictual.

Un participante.- Los casos muy complejos, ¿están previstos?

Sr. Sánchez.- Para esa valoración, en primer lugar, el Fiscal va a pedir la aplicación de la regla de ese trámite especial para poder quedar sometido a esas reglas especiales. Digamos que son reglas especiales en casos de investigaciones complejas, se investiga la complejidad y, obviamente, es el Fiscal quien valora la complejidad y la plantea ante el Juez para poder utilizar esos plazos a ampliar; con esto está trabajando el doctor Caramuti.

Un participante.- Pero eso también se los hace en las audiencias.

Sr. Sánchez.- Esa investigación es compleja, los casos complejos forman parte del libro sobre el juicio de procesos especiales.

Sra. Castillo de Ayusa.- Por eso, de alguna manera, vamos a presentarlo para que sea analizado.

Sr. Sánchez.- La investigación es de seis meses desde que se celebra la audiencia imputativa; y hay una audiencia obligatoria de control de prisión preventiva, salvo que el Juez hubiera fijado otra anteriormente, porque hay un momento que tiene que cerrar la investigación. El Fiscal debe demostrarle al Juez la necesidad de que continúe la prisión preventiva a los fines de poder ir a juicio, hay un examen obligatorio a los seis meses, que es el mismo plazo que tiene la investigación.

En el artículo 2º hablamos de las “condiciones carcelarias”. En realidad es una cuestión operativa que no tiene que ver, no tanto con el Código sino con las condiciones que tiene el sistema carcelario para recibir reclusos. La norma procesal refleja lo que es la garantía constitucional. De ahí, en base a esa garantía, se van a poder hacer las denuncias de encarcelamiento o violación de garantías en cuanto a las condiciones carcelarias. Pero sí hay una garantía en cuanto a las condiciones carcelarias y está en el artículo 2º.

La prisión preventiva tiene el plazo de un año que puede ser prorrogada, en el caso de las complejas creo que llega a dieciocho meses, si mal no recuerdo en Neuquén. El doctor Caramuti está tomando como referencia los códigos de Chubut y de Neuquén. Sé que en Neuquén son 18 meses en los casos de investigación compleja. El texto, el borrador, está a disposición para que lo discutamos.

Los actos compulsivos están previstos, la acusación del Fiscal y hay una novedad en la que el querellante pida la apertura a juicio. Es un tema a discutir si va a tener autonomía o si se trata del supuesto de una conversión de la acción, porque

puede que el Fiscal haya decidido fijar un criterio de oportunidad y la víctima, constituyéndose en querellante, ha pedido la conversión, que es el procedimiento que explicó la doctora, y en ese carácter, como querellante en una acción compartida, en privado está pidiendo él directamente el juicio y el requerimiento de sobreseimiento.

Esta es la etapa nueva, novedosa, o intermedia, la del control del mérito de la acusación, el Fiscal que considera que tiene elementos para ir a juicio, el requerimiento no se llama de elevación, como estamos trabajando nosotros actualmente, sino de apertura a juicio donde va a cumplir una serie de requisitos, de los cuales es interesante destacar: el ofrecimiento a prueba y la pretensión punitiva provisoria. En algunos casos porque eso tiene impacto en la determinación de la competencia del tribunal de juicio y en otros casos, porque lo pone como requisito por las dos etapas en las que se divide el juicio: la determinación de la responsabilidad del acusado, considerado culpable o no, y la otra es la determinación de la pena. Para estas dos discusiones que se van a dar luego en juicio se fija un requisito, que es la pretensión punitiva provisoria por parte del Fiscal que tiene que decir qué pena va a pedir en juicio, al menos provisoriamente ya lo tiene que anticipar.

Estas son las fases de la etapa intermedia: control de la acusación a través de una audiencia. Puede que en la audiencia se plantee por la defensa que existen vicios formales, el Juez puede intimar al Ministerio Público que subsane esos vicios. Si no los subsana en el plazo establecido, la sanción es grave para el Ministerio Público, se tiene por no presentada la acusación y se sobresee el caso. Es una forma de compeler al Ministerio Público a formular las acusaciones sin vicios, o si los tuviera, a cumplir en el plazo de la ley que fije el Juez el saneamiento.

Está prevista la intervención de todos los sujetos en la audiencia, el Fiscal, la querella.

Está previsto en el caso que la querella esté ejerciendo la acusación porque sea una acción compartida

Sra. Castillo de Ayusa.- Se sigue la misma idea que tenemos hoy: apliquemos la presencia del querellante siempre dentro de los extremos. Eso es lo que tenemos que discutir, si va a ser adhesivo, si va a ser autónomo y cuáles van a ser los límites.

Sr. Sánchez.- Tiene dos posibilidades, en el mismo código hay dos hipótesis: que el Fiscal continúe a cargo de la acusación como si fuera una acción penal y ahí el querellante tiene una participación y un rol determinado, que el titular de la acción es el Ministerio Público y este va con una acusación y si la querella tiene otra acusación existe una audiencia donde el Juez va a pedir la unificación de la acusación porque es una garantía para el defensor, porque no puede contestar dos acusaciones diferentes. También está previsto que el Fiscal pueda hacer una acusación subsidiaria, si se quiere, hace una acusación principal y si hay elementos, hace una acusación llamada alternativa, en subsidio plantea una acusación alternativa. Está previsto también eso.

Sra. Castillo de Ayusa.- Pasa que también tenemos que ir, de alguna manera, equilibrando los extremos de la actuación del querellante y el carácter del mismo y los extremos de participación de la víctima, porque caso contrario va a llegar un momento donde la víctima va a tener más participación que los querellantes que se constituyan en parte, con toda la responsabilidad que implica: procesal, penal, etcétera. Entonces, esas son justamente las cuestiones que nosotros queremos compartir.

Sr. Sánchez.- En la audiencia, el escrito ofrece prueba, en esa audiencia se va a plantear la admisión de las convenciones de acuerdo probatorias y los hechos sobre los que no hay discusión en cuanto a la prueba quedan directamente admitidos como hechos probados y sobre eso no hay que producir pruebas ni discutir nada al respecto. Va la decisión del Juez y directamente el auto de apertura a juicio. Este

auto de apertura a juicio tiene el carácter de irrecurrible, si hiciere falta hay una acción de anticipo de la jurisdiccional de pruebas que está prevista en esta etapa y luego la remisión de todos los antecedentes a la Oficina Judicial que es la que se va a encargar de asimilar el caso al Tribunal unipersonal o colegiado según cuál fuese el sistema que establezca la Ley de Organización de la Jurisdicción Penal y la devolución de todas las otras constancias que no sean necesarias para el juicio a las partes que las hubieran presentado, con lo cual terminan los tres primeros libros. Hay un texto borrador sobre esto, sobre el cual hemos estado trabajando haciendo una lectura para hacer correcciones, eso está en un 80% realizado y es necesaria una segunda lectura pero hemos venido participando muy pocas personas en ese trabajo y necesitamos la intervención de todos los miembros de la Comisión y los que han pedido incluirse en una u otra subcomisión necesitamos que intervengan directamente. Las discusiones a veces de un solo artículo o de un solo párrafo nos llevan una o dos horas y me parece que el ámbito ideal para este tipo de discusiones son las reuniones de trabajo que estamos llevando a cabo y que las venimos haciendo semanalmente, tratamos de acordar horarios, la doctora tiene obligaciones académicas, está a cargo de tres cátedras y de enseñar en la Escuela de Policía y tiene obligaciones personales y los que estamos trabajando en el Poder Judicial tenemos un horario de la mañana también complicado y estamos tratando de coordinar horarios. Lo que sí les pedimos es que una vez a la semana, si pudieran ser dos mucho mejor, sería necesario y conveniente que los interesados en participar de cada comisión se reúnan con nosotros para seguir debatiendo cada uno de estos temas en particular o que definamos en conjunto una agenda de temas que queramos tratar en un día determinado, pero la idea es de no dilatar mucho tiempo en estas reuniones, no demorarnos en fijar esa agenda porque, de lo contrario, nos vamos a quedar sin tiempo para tratar la propuesta de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el servicio público de la defensa, de la Ley Orgánica, eventualmente, si habría que considerar o no la Ley de Policía Judicial y luego de esto, nos queda un trabajo complejo que es el de si la Legislatura de la Provincia

considera oportuno sancionar estas leyes, su trabajo más arduo va a ser el de la implementación donde hay que prever el trabajo de implementación y lo que la doctora señaló atinadamente como el trabajo fundamental: el de cambio cultural a través de la capacitación, y vendrá la etapa de gestión de los recursos que deberán ser aplicados desde Ejecutivo al Judicial y de qué manera se llevará a cabo. Esa etapa es la siguiente y es necesario avanzar rápidamente en esta etapa para poder enfocarnos en lo que sigue. Mucho trabajo está hecho, es bastante. El doctor Albo tiene finalizada la etapa de los recursos y el doctor Caramuti tiene finalizado su trabajo. Necesitamos la discusión, eso es lo importante.

Sra. Castillo de Ayusa.- Además, si bien es cierto, todo lo que explicó el doctor Sánchez, lo tenemos “en borrador” -lo pongo entre comillas- porque si en este momento ustedes nos dicen: *“por favor, una copia de ese trabajo” y la verdad es que el mío no sirve de nada, porque tiene el proyecto de artículo una flecha, ver esto, ver lo otro, entonces, todavía no tengo un borrador; el borrador lo vamos a tener después que discutamos esto.*

Por otra parte, la experiencia nos dice: no es lo mismo leer en soledad un anteproyecto, que leerlo acompañado, porque a veces uno dice: “che, ¿y esto qué querrá decir?, ¿y esto por qué lo habrán puesto?”.

Entonces, si ustedes nos preguntan, como en el caso suyo, que acaba de preguntar sobre ¿qué pasa con los procesos complejos, si se los considera? inmediatamente uno contesta sí, se los considera en tal parte o en tal capítulo, y eso va agilizando la discusión; y además, repito, hay cuestiones que no exigen una discusión tan profunda, si van a ser tres o cinco días, pero sí qué vamos a legislar en el principio de oportunidad, el querellante que nos preguntaba el doctor.

Sr. Sánchez.- Nosotros hemos combinado el estilo de trabajo en las reuniones. La doctora tiene sus borradores trabajados con todos los códigos, está trabajando con todos los códigos sobre la mesa y escribe, y a la par de ese sistema escrito y

manuscrito vamos transcribiendo las normas que están ya revisadas en una primera lectura, en un texto; ese texto sí lo tenemos, pero no lo difundimos, porque es un texto que está para terminar. Cuando lo hace, el borrador, está con marcas, está con notas, está con colores, está resaltado, porque son los temas que tienen que ser discutidos.

Entonces, difundirlo significaría anticipar una discusión sobre algo que no está tratado. Lo que queremos, justamente, es convocarlos e invitarlos a que específicamente vengan a tratar los temas que les interesen y lo vean ahí al texto. Si está escrito, en la última numeración son 272 artículos, porque esto va variando según que corriamos, que ampliamos o suprimamos algún artículo.

Sr. Presidente (Caponio).- Con la incorporación próxima de los otros libros.

Sr. Farhat.- Una cosa para tener en cuenta y pongo a consideración de la Comisión, es que Información Parlamentaria de la Cámara tiene elaborado un instructivo con lo que se ha trabajado en el Digesto Jurídico, y que ha impactado en el 96% de las leyes que están vigentes.

Sr. Presidente (Caponio).- Nosotros, al borrador lo vamos a someter al trabajo de la Comisión, de los expertos.

Sr. Farhat.- Perfecto, pero hay una cuestión que la experiencia, ya no en el Digesto, que es cuando fue el trabajo a los lingüistas hubo alteraciones en los tiempos verbales y en la redacción, que cambia el sentido del articulado. Entonces, sería bueno adelantarse en esta oportunidad para no tener esos inconvenientes.

Sr. Sánchez.- Es importante la experiencia que han tenido en el Digesto.

Sra. Castillo de Ayusa.- Pero, justamente las reglas legislativas que nosotros estamos manejando, en materia de Código, nos indica el tiempo del verbo y la preferencia de uno a otro tiempo.

Sr. Sánchez.- Tiempo presente por tiempo futuro, salvo en un futuro racional.

Sra. Castillo de Ayusa.- Lo que sucede es que en este trabajo este y a veces trabajar sobre un artículo nos obliga, y qué puede suceder y qué no puede suceder, y si sucede cuál va a ser la respuesta y sí, cometemos el error.

Sr. Sánchez.- Analicemos las hipótesis y alternativas y cuáles serían las soluciones más simples y más eficientes.

Sra. Castillo de Ayusa.- A lo mejor del verbo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, una coma después debe ser corregida.

Sr. Sánchez.- Teniendo en cuenta algo, el Código Procesal, el nuevo texto va a ser la principal herramienta de capacitación, por eso tiene que ser un texto de lectura fácil, de comprensión fácil, para evitar cuestiones de interpretación de texto, sí dijo, si no dijo, si qué quiso decir, eso ya lo tenemos bien en cuenta.

Sra. Castillo de Ayusa.- Y nos interesa en la discusión porque nos ha sucedido con el actual Código, todos sabemos cómo entra en vigencia, de un día para otro sin nada de discusión.

Entonces, cuando se dio el momento de interpretar alguna norma, no contábamos con la discusión de nadie, porque en realidad se tomó el proyecto de Córdoba y se lo copió. Entonces, interpretar una norma, tiene como premisa interpretar lo que quiso decir el Legislador, en este caso entiendo que somos todos, y existiendo una mayoría y una minoría, después no nos vamos a encontrar con

interpretaciones completamente distintas como con las que nos encontramos hoy. Y esto nos lleva a que en una Sala se trabaje de una manera, en una Fiscalía de otra manera y, justamente, es porque no tenemos una fuente de dónde se trabajó esta norma a los fines de la interpretación.

Sr. Presidente (Caponio).- Respecto a la propuesta que ha hecho la doctora, que es muy interesante, quiero hacer conocer que en el trabajo de la subcomisión van a estar presentes los taquígrafos, para que se vayan levantando las decisiones del porqué de la redacción del artículo.

Sr. González Navarro.- Sería importante también que en el anteproyecto se establezca cuál ha sido, no toda la mecánica, sino esta discusión, como se ha puesto en el proyecto del Código Penal. Porque lo que usted dice, doctora, por ahí se circunscribe al debate parlamentario, y esto no va a ser parlamentario.

Sra. Castillo de Ayusa.- Esto no va a tener un debate parlamentario, es un debate interno de comisión.

Sr. Presidente (Caponio).- Y vuelvo a hacer hincapié: la subcomisión está trabajando y ha avanzado muchísimo, es necesario que aquellos miembros que quieran intervenir en algún aspecto en particular y debatir algún principio o alguna cuestión concreta, se sumen al trabajo de las subcomisiones. Si tratamos, por ejemplo, el principio de oportunidad en el plenario de la Comisión, nos puede llevar varios días resolverlo.

Sr. González Navarro.- Sería importante que nos digan los días.

Sr. Presidente (Caponio).- Hace dos meses que venimos reuniéndonos todos los días.

Sr. Jogna Prat.- No todos tenemos la posibilidad de reunirnos todos los días.

Sr. Sánchez.- Por eso la idea es que acordemos una agenda común, fijemos un día en la semana, que sea el que menos complicación nos traiga a la mayoría, y lo sepamos con anticipación para poder ordenar el resto de nuestras respectivas agendas.

Sr. Presidente (Caponio).- A este primer borrador, que son las primeras ideas del doctor Sánchez y de la doctora Castillo de Ayusa, se lo va a circularizar y se va a trabajar sobre eso.

Sr. Jogna Prat.- Hay una cosa que no la termino de entender, y si es como la entiendo no coincido particularmente. A mí me resulta muy difícil debatir un tema sin conocerlo. No puedo venir a sentarme a hablar de todo lo que se ha hecho de la defensa, de la querrela, de la víctima o de los sistemas de recursos y nulidades si no conozco absolutamente el proyecto. Bueno, puedo hacer mi *mea culpa*, no hemos tenido la participación en estos días y hoy nos encontramos con doscientos artículos.

Hoy me resulta muy difícil venir a debatir, a intercambiar ideas si no tengo la noción de qué estamos conversando. Para venir a plantear un tema debería medianamente conocer algo.

Sr. Albo.- Lo que se podría hacer, si bien es cierto que los artículos están parchados, porque estos dicen, por ejemplo, una parte del texto y después dicen dos posiciones diferentes, una con un color y otra con otro, y es complicado circularizar un texto así. ¿Se podría circularizar el *Power Point* donde están los institutos? Entonces, cada uno va formando su opinión y su criterio de cada instituto.

Sr. Sánchez.- Que se suba a la página.

Sr. Albo.- Entonces, con esto cada uno va formando una opinión respecto a cada uno de los puntos.

Sr. Jogna Prat.- Puede ser de utilidad si le dicen, por ejemplo: en el tema “defensa”, hemos seguido el criterio de tal cosa; en el tema “querrela”...

Sr. Sánchez.- El borrador tiene una nota de pie de página con las concordancias de los artículos respectivos de Chubut y Neuquén. Pero la idea no es hacer una reunión para hacerlos recibir algo sin conocimiento previo. La idea es hacer una serie de reuniones en las cuales ir, conocer, explicaríamos qué es lo que se hizo, vean el texto y si no se lo puede debatir inmediatamente y necesitan otro día para estudiarlo, se puede esperar. Es una decisión interna.

Sr. Presidente (Caponio):- Expliquemos la dinámica: la subcomisión se viene reuniendo permanentemente. Nuestra idea es terminar un primer borrador en base a todos los análisis y estudios que se han hecho de los distintos códigos y convocarlo al que se quiera sumar en esta instancia a que se sume, coordinando los horarios y los días de trabajo, ya sea tratamiento de los Principios Generales o la Investigación Penal preparatoria.

Sr. Farhat.- ¿Se podría circularizar el horario?

Sr. Sánchez.- La idea era citar hoy ya la primera reunión.

Sr. Farhat.- Nosotros tenemos otra reunión ahora, así que si les rogaría que luego me comuniquen.

Sr. Sánchez.- El Presidente lo fijaría al día; en principio vamos a hacer un impasse hasta el día 27, pero si alguien en ese ínterin quiere hacer una lectura del borrador, o si quieren que nos reunamos para hacer una lectura de ese borrador, como lectura no como discusión, se podría hacer.

Sr. Presidente (Caponio).- El trabajo de las subcomisiones se va a reanudar después del día 27; entre tanto, el que se quiera interiorizar de lo ya realizado, puede hacerlo.

Sr. González Navarro.- Si me permiten, en primer lugar, quiero felicitar a los que han ido redactando porque realmente es lo que un poco veníamos reclamando, ya que ellos tienen una preparación y una especialización particular sobre el tema para avanzar, y la verdad es que lo han hecho muy satisfactoriamente. Además, uno comparte plenamente la concepción ideológica del Código y además es, reitero, destacable, la tarea que han realizado, así que quiero felicitarlos en nombre de los que no hemos participado de esa tarea pero la valoramos muchísimo.

Sr. Jogna Prat.- Ahora hay que ver cómo se implementa para continuar en el marco del que uno pueda tener más participación.

Sr. Sánchez.- La idea es reunirse para ver cuestiones puntuales y, reitero, si alguien necesita reunirse para una lectura del borrador de determinados temas como para tener un conocimiento pleno y tener una posición, lo podemos hacer. La doctora está todos los días y yo vengo periódicamente también, así que podemos coordinar. Y hasta el día 27 que sería la primera reunión de trabajo en ese sentido y si alguien quiera que nos reunamos, lo hacemos.

Sr. Jogna Prat.- Podría venir el representante titular u otra persona.

Sra. Castillo de Ayusa.- Yo entiendo que a veces, no es como en el caso nuestro, que hace años que estamos en esto, y felizmente tenemos una teoría elaborada. A veces uno tiene una especialidad, y por eso si usted prefiere que venga un asesor o

abogado que ha hecho del Derecho Penal su especialidad, creo que no hay ningún problema, porque después lo discutimos en el plenario.

Sr. Jogna Prat.- Me gustaría ver, sobre todo, aunque no soy un especialista en lo específico, pero en lo que el Derecho Penal se enlaza con Derecho Constitucional, los derechos internacionales. Y por eso me parece que hay cuestiones que es importante verlas, y lo digo como representante del Colegio de Abogados, no lo hago a título personal, porque estoy acá como Colegio de Abogados y que puede venir gente del Colegio de Abogados, pedirle en particular a algunos que analice este instituto, nos gustaría que sea analizado, que vengan y puedan leer el anteproyecto y lo podamos debatir a título personal o a título de algún interlocutor designado por el Colegio.

Sr. Presidente (Caponio).- También tenemos muchas expectativas en el viaje que estén por realizar, porque lo hemos visto que en la práctica.

Sr. Jogna Prat.- Lo mismo que hicieron ustedes, pero desde otra óptica.

Sr. Presidente (Caponio).- La Comisión es consciente de eso, lo venimos trabajando, estuvimos trabajando permanentemente y estamos esperando el viaje para que nos hagan un aporte valioso respecto de la visión y de la óptica laboral.

Sr. Sánchez.- Las cuestiones que sean puntualmente conflictivas hay que detectarlas ya, si es posible ponerlas en el informe para que no generen ese conflicto.

Sr. Jogna Prat.- Esta semana no se lo pudo hacer por una falta de coordinación con la gente del Colegio de Abogados de Rosario, no nos pudimos poner de acuerdo, pero la idea es hacerlo la semana que viene.

Sra. Castillo de Ayusa.- Pero creo que tienen el panel de la reforma al Código Penal.

Sr. Jogna Prat.- Había un conflicto por el cual no se había podido coordinar los horarios. El doctor García Posse estaba en ese tema.

Sr. Presidente (Caponio).- Cuando regrese la doctora retomamos la actividad de la subcomisión.

Sr. Jogna Prat.- Creo que sin ese motor es muy difícil avanzar, debemos tratar de buscar la forma de insertarnos, pero con elementos para generar una discusión y no venir de oyente. El tema que más nos importa es el del querellante, porque veo que vamos en un sentido de darle mucha más participación a la víctima, que es la participación de la querrela con el ejercicio de la acción penal.

Me parece que si estamos avanzando hacia ese sentido, la querrela también necesitaría tener mayor autonomía.

-Varios participantes hablan simultáneamente.

Sr. Sánchez.- Está previsto ya en el texto del anteproyecto del Código Penal. Es más se da un plazo de caducidad.

Sr. Presidente (Caponio).- Muy bien, se da por finalizada la reunión.

- Es la hora 18.55.